

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No.:	11001-33-35-025-2020-00193-00
DEMANDANTE:	CENAIDA HUESO CORTES
DEMANDADO(A):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
MEDIO DE	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
CONTROL:	DERECHO

Ha venido el expediente de la referencia con providencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "C", en la cual resolvió revocar parcialmente la sentencia de fecha 18 de agosto de 2021 proferida por este despacho.

En consecuencia,

DISPONE:

- **1. OBEDÉZCASE y CÚMPLASE** la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "C", que revocó parcialmente la sentencia proferida por este despacho el 18 de agosto de 2021.
- **2.** Ejecutoriado el presente auto, **devuélvase** a la parte actora el remanente de los gastos del proceso, **si los hubiere**; y **archívese** el expediente, previa las anotaciones a las que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

CLM.



Página 2 de 2

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No.:	11001-33-35-025-2021-00265-00
DEMANDANTE:	ALEXANDER BEJARANO HERNANDEZ
DEMANDADO(A):	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
MEDIO DE	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
CONTROL:	DERECHO

Ha venido el expediente de la referencia con providencia proferida el 24 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "B", en la cual resolvió confirmar la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2021 proferida por este despacho.

En consecuencia,

DISPONE:

- **1. OBEDÉZCASE y CÚMPLASE** la sentencia proferida el 24 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "B", que confirmó la sentencia proferida por este despacho el 21 de septiembre de 2021.
- **2.** Ejecutoriado el presente auto, **devuélvase** a la parte actora el remanente de los gastos del proceso, **si los hubiere**; y **archívese** el expediente, previa las anotaciones a las que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

CLM.



Página 2 de 2

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0efaba0159907143777bc28dabdf28fdb17cd5e4ef417c83f534ba5a8769f5e7**



Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2013-0612-00
DEMANDANTE	EMILIA RODRIGUEZ DE MARTÍN
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
	DEL MAGISTERIO
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Visto el informe secretarial que antecede, se requiere a la parte demandante para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del presente auto, se sirva a aclarar al Despacho lo pretendido con el memorial allegado al Juzgado, el 26 de agosto de 2022, toda vez que, no es clara la solicitud del actor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **70596b833b0f18f3d87f786b685e87c3564fa5dc6cca322e9b0550b46cb941fa**

Documento generado en 12/09/2022 03:44:31 PM



Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0327-00
DEMANDANTE	MARIA MERCEDES PEÑA TORRES
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO- DISTRITO CAPITAL
	DE BOGOTÁ- SECRETARIA DE EDUCACION
	DISTRITAL Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Por reunir los requisitos legales establecidos en los artículos 155 ss., 162 ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y de conformidad con lo previsto en el artículo 171, este Despacho ADMITE LA DEMANDA interpuesta por MARIA MERCED3ES PEÑA TORRES en contra de la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL— FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. De oficio, se ordena vincular a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. En tal virtud, dispone:

- 1. Notificar personalmente al representante legal de NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL— FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ-SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y/o su delegado, remitiendo mediante correo electrónico o mensaje de datos a las direcciones electrónicas destinadas para recibir notificaciones judiciales copia del auto admisorio de la demanda atendiendo lo previsto el numeral 8 del artículo 162 del C.P.A.C.A modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 y artículos 197 y 198 del Código de Procedimiento Administrativo, modificados por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
- 2. Notificar Personalmente al MINISTERIO PUBLICO, copia del auto admisorio de la demanda, demanda y sus anexos, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, que modifico la Ley 1437 de 2011.
- 3. Comuníquese este auto en conjunto con la demanda y sus anexos a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, en virtud de lo preceptuado en el inciso final del artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 que modificó el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo, el cual señala que esta entidad únicamente interviene por los intereses litigiosos establecidos en el Decreto 4085 de 2011, sin que por tal acción se le considere como sujeto procesal en el trámite de la referencia.

- 4. De conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A, córrase traslado a los demandados, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, por el término de treinta (30) días, para los efectos del artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, término que comenzará a correr de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 199, es decir después de dos (2) días hábiles siguientes al día en que fueron enviados los mensajes de datos constitutivos de la notificación personal.
- 5. PREVENIR a las partes y a sus apoderados, que es deber de los sujetos procesales suministrar al Despacho y a los demás sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.
- **6. Se advierte** que no se fijarán gastos procesales en este momento procesal, no obstante, de requerirse la instancia fijará tales expensas en providencia posterior.
- 7. PREVENIR a la parte demandante que, deberá <u>aportar todas las</u> <u>documentales que se encuentren en su poder</u> en los términos del numeral 5 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
- 8. Tener como apoderado(a) de la parte demandante al(a) abogado(a) SAMARA ALEJANDRA ZAMBRANO VILLADA identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.757.608 y portador(a) de la Tarjeta Profesional No. 289.231 del H. Consejo Superior de la Judicatura (fs. 1-2 carpeta 001), del expediente digital.
- 9. Se advierte a la(a) entidad(es) demandada(s) que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deberá(n) aportar con la contestación de la demanda el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del(os) funcionario(s) encargado(s) del asunto. Vencido el término de traslado, si no se allegaren los antecedentes administrativos, por Secretaría requiérase, por una sola vez, a la(s) accionada(s) para que en forma inmediata envíe(n) la mencionada documentación, so pena de compulsar copias a la instancia disciplinaria respectiva.
- **10.** por secretaria del Juzgado, **OFÍCIESE** a la **FIDUPREVISORA S.A**, para que allegue con destino a este Despacho, con ocasión del reconocimiento del pago

N.R.D. 2022-0327-00 Demandante: María Mercedes Peña Torres Demandada: NACIÓN – MIN. EDUCACIÓN y OTROS

de cesantías de **MARIA MERCEDES PEÑA TORRES** identificada con cedula de ciudadanía 40.021.432:

- Certificación de la fecha de consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías del año 2020.
- Fecha en que la Fiduciaria impartió aprobación o desaprobación del proyecto, y remitió a la entidad territorial la decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin, el año 2020.
- 11. por secretaria del Juzgado, OFÍCIESE a la SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ, para que allegue con destino a este Despacho, con ocasión del reconocimiento del pago de cesantías de MARIA MERCEDES PEÑA TORRES identificada con cedula de ciudadanía 40.021.432:
 - Resolución que ordenó el reconocimiento de las cesantías anuales del 2020.
 - Fecha en que elaboró, subió y remitió a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que fuera revisado por la fiduciaria, para cada uno de los años solicitados en la demanda, esto es, 2020.
 - Fecha en que la Secretaría subió y remitió el acto administrativo a la Fiduciaria, a través de la plataforma empleada para tal fin, para cada uno de los años solicitados en la demanda, esto es, 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ 6d784f1bb33b363b3545b6ea87b3e68a85818e62068d81c6e43284df70c45d3a}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:36 PM



Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-00329-00
DEMANDANTE	MARIO HUMBERTO MENDOZA MEZA
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE
	EDUCACION DE BOGOTÁ Y FIDUPREVISORA S.A
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Por reunir los requisitos legales establecidos en los artículos 155 ss, 162 ss, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y de conformidad con lo previsto en el artículo 171, este Despacho ADMITE LA DEMANDA interpuesta por el señor MARIO HUMBERTO MENDOZA MEZA en contra de la NACION, EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ Y LA FIDUPREVISORA S.A En tal virtud, dispone:

- 1. Notificar personalmente al representante legal de NACION, EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ Y LA FIDUPREVISORA S.A y/o su delegado, remitiendo mediante correo electrónico o mensaje de datos a las direcciones electrónicas destinadas para recibir notificaciones judiciales copia del auto admisorio de la demanda atendiendo lo previsto el numeral 8 del artículo 162 del C.P.A.C.A modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 y artículos 197 y 198 del Código de Procedimiento Administrativo, modificados por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
- 2. Notificar Personalmente al MINISTERIO PUBLICO, copia del auto admisorio de la demanda, demanda y sus anexos, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, que modifico la Ley 1437 de 2011.
- 3. Comuníquese este auto en conjunto con la demanda y sus anexos a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, en virtud de lo preceptuado en el inciso final del artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 que modificó el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo, el cual señala que esta entidad únicamente interviene por los intereses litigiosos establecidos en el Decreto 4085 de 2011, sin que por tal acción se le considere como sujeto procesal en el trámite de la referencia.

- 4. De conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A, córrase traslado a los demandados, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, por el término de treinta (30) días, para los efectos del artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, término que comenzará a correr de acuerdo con el inciso cuarto del articulo 199, es decir después de dos (2) días hábiles siguientes al día en que fueron enviados los mensajes de datos constitutivos de la notificación personal.
- 5. PREVENIR a las partes y a sus apoderados, que es deber de los sujetos procesales suministrar al Despacho y a los demás sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.
- **6. Se advierte** que no se fijarán gastos procesales en este momento procesal, no obstante, de requerirse la instancia fijará tales expensas en providencia posterior.
- 7. PREVENIR a la parte demandante que, deberá <u>aportar todas las</u> <u>documentales que se encuentren en su poder</u> en los términos del numeral 5 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
- 8. Tener como apoderado(a) de la parte demandante al(a) abogado(a) SAMARA ALEJANDRA ZAMBRANO VILLADA, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.757.608 y portador(a) de la Tarjeta Profesional No. 289231 del H. Consejo Superior de la Judicatura (fls. 61-64 carpeta 001Demanda), del expediente digital.
- 9. Se advierte a la(a) entidad(es) demandada(s) que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deberá(n) aportar con la contestación de la demanda el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del(os) funcionario(s) encargado(s) del asunto. Vencido el término de traslado, si no se allegaren los antecedentes administrativos, por Secretaría requiérase, por una sola vez, a la(s) accionada(s) para que en forma inmediata envíe(n) la mencionada documentación, so pena de compulsar copias a la instancia disciplinaria respectiva.
- 10.por secretaria del Juzgado, OFÍCIESE a la FIDUPREVISORA S.A , para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del respectivo oficio, allegue con destino a este Despacho, con ocasión del reconocimiento del pago de

cesantías del señor **MARIO HUMBERTO MENDOZA MEZA** identificado con cedula de ciudadanía 13.463.775:

- Certificación de la fecha de consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías del año 2020.
- Fecha en que la Fiduciaria impartió aprobación o desaprobación del proyecto, y remitió a la entidad territorial la decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin.
- 11.por secretaria del Juzgado, OFÍCIESE a la SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del respectivo oficio allegue con destino a este Despacho, con ocasión del reconocimiento de la pago de cesantías del señor MARIO HUMBERTO MENDOZA MEZA identificado con cedula de ciudadanía 13.463.775:
 - Resolución que ordenó el reconocimiento de las cesantía anuales del año 2020.
 - Fecha en que elaboró, subió y remitió a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que fuera revisado por la fiduciaria.
 - Fecha en que la Secretaría subió y remitió el acto administrativo a la Fiduciaria, a través de la plataforma empleada para tal fin.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

CLM.



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ 087f4cbffbf5a304dd7d3a2cd5436492b1851574729f78e63d660859ac384bef}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:37 PM



Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-00332-00
DEMANDANTE	MARIA LEONOR GIRALDO TORRES
DEMANDADO	NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR
	DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ASUNTO	MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Sería del caso que esta Judicatura se pronunciara sobre la admisibilidad de la demanda presentada mediante apoderado por la señora MARIA LEONOR GIRALDO TORRES contra LA NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de no ser porque el suscrito se considera incurso en causal de IMPEDIMENTO que es necesario declarar.

En efecto, al tenor de lo dispuesto por el **artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,** se tiene que:

"Artículo 130. Causales. <u>Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 141 del Código General del Proceso</u> y, además, en los siguientes eventos:

- 1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia.
- 2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
- 3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados." (Subrayado fuera de texto)

En concordancia con lo anterior, el artículo 141 del Código General del **Proceso**, dispone:

"Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso."

Ahora bien, considera el Suscrito encontrarse incurso en la causal de impedimento establecida en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que el asunto a dilucidar versa sobre la inclusión de la Bonificación Judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de TODAS las prestaciones sociales de la demandante.

Así las cosas, y como quiera que a los jueces y empleados de la Rama Judicial sí nos fue reconocida en las mismas condiciones que a la demandante, una Bonificación Judicial mediante Decreto 383 de 2013, existe un interés directo o indirecto en las resultas del problema jurídico que se plantea en la cuando en la actualidad me encuentro demanda; lo citado, máxime adelantando demanda en contra de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE **ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** -para obtener el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales. Ahora bien, se tiene que el presente litigio entraña pretensiones relacionadas con el "Reconocimiento de la bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar (D. 383/13) como factor salarial para todas las prestaciones", asunto en el cual, de acuerdo con el informe aludido, todos los jueces se declaran impedidos. Ello es así, porque nos asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que los jueces de la República también somos destinatarios de la inclusión de la Bonificación Judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales.

Ahora bien, debe recordarse que mediante Acuerdo PCSJA22-11918 "Por el cual se crean unos cargos con carácter transitorio para Tribunales y Juzgados a nivel nacional" se dispuso crear tres Despachos con carácter transitorio para la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a partir del 7 de febrero y hasta el 10 de noviembre de 2022.

En virtud de lo anterior, mediante oficio No. CSJBTO22-817 del 24 de febrero 2022, se informó la Coordinación de los Juzgados Administrativos de Bogotá, que la asignación de procesos a los Juzgados Transitorios se realizara en la forma dispuesta por el Consejo Seccional mediante acuerdo No. CSJBTA21-44 del 9 de junio de 2021, correspondiéndole a Este Estrado Judicial el envío de procesos al Juzgado Segundo Administrativo Transitorio.

Es así como, por Secretaría se remitirá el expediente al Juzgado Segundo Administrativo Transitorio de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, para que decida lo pertinente sobre esta manifestación de impedimento.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARARSE IMPEDIDO para conocer de la presente acción por asistir interés directo en las resultas del proceso, conforme a la causal primera del artículo 141 del Código General del Proceso y al trámite previsto en el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: REMITIR el expediente el expediente al Juzgado Segundo Administrativo Transitorio de Bogotá para lo que estime procedente.

TERCERO: Por la Secretaría, **dispóngase** lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA
Juez



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **07f4bdc90208bfa312fdec5a18c15a42554a3764c0644ae6ef3ecf5798dfc38d**

Documento generado en 12/09/2022 03:44:38 PM



Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-00313-00
DEMANDANTE	WILLIAM GALVIS DIAZ
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUCIARIA LA
	PREVISORA
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El Despacho procede a estudiar la admisibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto a través de apoderado judicial por William Galvis Díaz, contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Secretaría de Educación de Bogotá- Fiduciaria la Previsora.

Revisado en expediente, se observa que en este momento resulta improcedente la admisión de la demanda, toda vez que no se ajusta formalmente a las exigencias legales establecidas en la Ley 2080 de 2021, en consecuencia, se debe inadmitir, para que en el término legal de diez (10) días, previstos en el artículo 170 del CPACA, la parte demandante aclare en las pretensiones de la demanda la fecha de radicación de la petición presentada ante el Distrito capital – Secretaria de Educación de Bogotá, toda vez que, la indicada no corresponde a la mencionada en los hechos y en las pruebas allegadas con la demanda.

En virtud de lo expuesto el **JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por William Galvis Díaz, quien actúa a través de apoderada judicial, contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Secretaría de Educación de Bogotá- Fiduciaria la Previsora, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER el término de diez (10) días, de conformidad con el artículo 170 del CPACA, para que se subsanen los defectos indicados, so pena de rechazo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

CLM.



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ 9b4634edce4d5891ea8bcf803f0d20116dcfe87e4af7ed2f5bf4b2406eca35a2}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:39 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA:	11001-33-31-025-2022-0330-00
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
	PENSIONES- COLPENSIONES
DEMANDADO:	MORGAN MARCELIANO SANDOVAL
CONTROVERSIA:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO-
	Lesividad

I. OBJETO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, este Despacho procederá a rechazar el medio de control incoado, por no ser los actos administrativos demandados, pasible de control judicial, previas las siguientes:

II. ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho- lesividad, tendiente a obtener la nulidad de las siguientes:

- "1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 001176 del 22 de marzo de 1997, mediante la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez al señor SANDOVAL BARRERO MORGAN MARCELIANO, efectiva a partir del 13 de febrero de 1997 por valor de \$172.005, por ser dicho reconocimiento contrario a derecho.
- 2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 9986 del 21 de junio de 2010, mediante la cual, el Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, acato la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla del 13 de marzo de 2009, en el sentido de conceder incrementos pensionales del 14% por persona a cargo al señor SANDOVAL BARRERO MORGAN MARCELIANO, efectiva a partir del 1 de julio de 2010.
- 3. Que se declare la nulidad de la resolución No. 00016619 del 09 de noviembre de 2010, mediante la cual, el Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, modifico la Resolución No. 9986 del 21 de junio de 2010, en el sentido de reconocer retroactivo pensional desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 30 de junio de 2010 en favor del señor SANDOVAL BARRERO MORGAN MARCELIANO".

Por reparto ordinario le correspondió conocer a este Despacho judicial, tal como consta en la respectiva acta, no obstante, esta Judicatura observa, que el medio de control deprecado debe ser rechazado por las siguientes razones.

III. CONSIDERACIONES

De los actos administrativos demandables ante la Jurisdicción.

Los actos administrativos susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son aquellos que producen efectos jurídicos directos o indirectos, es decir, los que crean, reconocen, modifican o extinguen situaciones jurídicas hacia el exterior o el interior de la entidad.

Pero no todo pronunciamiento de la administración tiene la vocación o cualidad de producir efectos jurídicos, en tanto, en cumplimiento de sus funciones los servidores públicos o particulares en ejercicio de funciones públicas pueden expedir actos instructivos o informativos que en modo alguno alteran los derechos u obligaciones de los particulares o afectan el ordenamiento legal, y en esta medida, no son pasibles de control jurisdiccional.

De los actos de ejecución y su control jurisdiccional.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme en indicar que los actos administrativos de ejecución, no son susceptibles de control jurisdiccional, salvo que éstos creen una situación nueva.

Sobre el concepto de los actos de ejecución la Sección Primera del Consejo de Estado¹, precisó:

"[...] El acto de ejecución, por el contrario, aunque es unilateral también y proferido en desarrollo de dicha función, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, pues el efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de la ejecución, de ahí que no sea pasible de control ante el juez. El acto de ejecución, en síntesis, plasma en el mundo material o jurídico, según sea el caso, el contenido del acto administrativo, dándole efectividad real y cierta [...]".

En el mismo sentido, según lo ha indicado la Corte Constitucional, los actos de ejecución se caracterizan por²:

"[...] (i) no admitir recursos en vía gubernativa; (ii) en caso de que causen perjuicio al administrado, éste podrá accionar conforme a las reglas de control de los actos administrativos, contenidas en la parte segunda del Código Contencioso Administrativo; y (iii) su naturaleza dependerá de su configuración, fines y efectos, con prescindencia de la denominación que le acuerde la administración. En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control judicial; [...]"

De todo lo anterior se concluye que únicamente las decisiones de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o aquellos que afecten derechos o intereses, o impongan cargas, sanciones y obligaciones que

¹ Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, 14 de agosto de 2014, radicación núm.: 25000 2324 000 2006 00988 01, Actor: ISAGEN E.S.P

afectan o alteran situaciones jurídicas determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de esta jurisdicción, de ahí que los que impulsan la actuación, no procuran por solucionar de fondo las solicitudes de los administrados o se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son cuestionables vía judicial, sin embargo, se ha admitido por el Consejo de Estado que si el "acto de ejecución" excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer control de legalidad frente al mismo, a través de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente ya que en tal eventualidad se genera un verdadero acto administrativo, susceptible de control jurisdiccional en aras de revisar su legalidad³.

Del caso en concreto.

En el sub examine, las pretensiones solicitadas por la parte demandante consisten en declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones:

- Resolución No. 001176 de 19 de marzo de 1997, por medio de la cual se reconoce una pensión de vejez⁴.
- Resolución No. 9986 de 21 de junio de 2010, por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial, proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla⁵.

En la parte resolutiva de la citada resolución, se resolvió acatar el fallo judicial emitido por Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla de fecha 13 de marzo de 2009, el cual ordenó al Instituto de Seguros Sociales, reconocer un incremento pensional por persona a cargo del señor Morgan Marceliano Sandoval Barreto.

- Resolución No. 00016619 de 9 de noviembre de 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución No. 9986 de 21 de junio de 2010⁶.

En su parte resolutiva se ordena reconocer un valor retroactivo causado desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 30 de junio de 2010.

Así, se puede concluir que en el caso concreto los actos enjuiciados serían de ejecución, como quiera que están acatando una orden judicial emanada de una sentencia, en este caso, una providencia proferida por la Jurisdicción Ordinaria.

Para este Despacho es necesario precisar que la calificación de un acto administrativo como **definitivo** o de **ejecución** es fundamental para determinar

³ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, auto del 15 de abril de 2010, Radicación número: 52001-23-31-000- 2008-00014-01(1051-08).

⁴ Ver folio 106 del archivo 002 del expediente digital.

⁵ Ver folio 107 del archivo 002 del expediente digital.

⁶ Ver folio 110 del archivo 002 del expediente digital.

si es susceptible de los recursos respectivos y, asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo; los definitivos concluyen la actuación administrativa, en tanto deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos decisivos, mientras que los de ejecución no crean ni modifican una situación jurídica, como es el caso que nos ocupa, donde la entidad demandante está ejecutando una orden judicial.

El Consejo de Estado ha dicho al respecto que en los eventos en que la administración da cumplimiento a decisiones emitidas por autoridades judiciales únicamente profiere actos que **ejecutan** el contenido material de las mismas sin que, en principio, haya lugar a establecer situaciones jurídicas nuevas o distintas a las que fueron objeto de debate y, conclusión en sede judicial; sin embargo, si el acto expedido por la administración, en cumplimiento de una decisión judicial, aborda aspectos distintos a los expresados en la decisión a ejecutar, se está en presencia de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas nuevas que conllevan un típico acto administrativo susceptible de control judicial.

No sobra recalcar que aun cuando en principio los actos mediante los cuales se hace efectiva una sentencia no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también es cierto que, cuando hay desconocimiento de la decisión judicial en cuanto el acto de cumplimiento del fallo crea una situación nueva, que en este caso no se da, por cuanto la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones no infiere que los actos acusados fueron expedidos contario a lo señalado en la providencia que les dio origen o que no se acató en debida forma la orden judicial, es decir, se limita a señalar razones de hecho y de derecho respecto del derecho pensional, que ya fue debatido en sede judicial.

Sumado a lo anterior, la entidad demandante no señala que los actos acusados hayan abordado situaciones y aspectos distintos debatidos en sede judicial que hagan procedente el medio de control incoado. Así las cosas, para esta Judicatura no cabe duda que, las pretensiones invocadas en el presente medio de control deben ser rechazadas por no se susceptibles de control judicial.

Por las razones expuestas, se dará aplicación 3 del artículo 169 de la Ley 1437, esto es, se rechaza la demanda por no ser los actos demandados susceptibles de control judicial.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda por no se suceptible de control judical, presentada por Administradora Colombiana De Pensiones-Colpensiones contra Morgan Marceliano Sandoval, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto, **archívese** el expediente, previa las anotaciones a las que haya lugar

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

MAM



5

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0333-00
DEMANDANTE	JOSE VICENTE PRADA SUAREZ
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
	EJERCITO NACIONAL
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, y previo a avocar el conocimiento de la presente demanda, por secretaria del Juzgado, se requiere a la **DEMANDANTE** a fin de que allegue con destino a este proceso la siguiente documentación:

 Apórtese copia del acta de conciliación extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Bogotá, toda vez que, no fue aportada al plenario y sea hace necesaria a fin de determinar la caducidad del medio de control incoado.

Para lo anterior, se concede un término de diez (10) días, contados a partir del recibo del oficio que para el efecto se libre.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ e6829a967aeb6ff04459d114e79ec9c84dde742fb0b41f2b519bbc3233237ad2}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:41 PM



Correo único de radicaciones: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D. C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO EJECUTIVO	
RADICACIÓN:	11001-33-35-025-2015-0357-00
DEMANDANTE:	GRACIELA ANGULO ANGULO
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
DEMANDADO:	PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
	DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

De lo obrante en el expediente se observa que la señora **Graciela Angulo Angulo** acudió a esta Jurisdicción con el objetivo de recaudar, por la vía ejecutiva, los intereses de mora derivados de las obligaciones impuestas en sentencias proferidas, en su orden, el **25 de abril de 2008**¹ y el **14 de agosto de 2008**² por este Juzgado y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso identificado con número de radicación 2004-08363-00.

Agotado el trámite de rigor, el Despacho profirió fallo de primera instancia calendado **14 de julio de 2016**³, en el que ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de **diez millones**, **seiscientos treinta y seis mil, doscientos veintitrés pesos (\$10.636.223)** y condenó en costas a la **UGPP** en suma igual al 7% de la liquidación del crédito.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte ejecutada interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E mediante sentencia de **3 de mayo de 2019**⁴, en la que dispuso revocar el proveído recurrido, y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

El Juzgado dictó auto de obedecimiento al superior el **18 de julio de 2019**⁵ en virtud de lo cual, dejó sin efectos ni valor jurídico las providencias dictadas en el trámite de liquidación del crédito reconocido en la sentencia revocada (autos de 28 de abril de 2017, 27 de julio de 2018 y 25 de enero de 2019).

Posteriormente, en sede de tutela y bajo el radicado 11001031500020190442400, el Consejo de Estado profirió fallos de 13 de noviembre de 2019 y 20 de febrero de 2020, en los cuales amparó los derechos fundamentales de acceso a la administración de

¹ Ver folio 180 del Archivo 001 del expediente digital

² Ver folio 194 del Archivo 001 del expediente digital.

³ Ver folio 303-312 del Archivo 001 del expediente digital. 4 Ver folio 357 – 372 del Archivo 001 del expediente digital.

⁵ Ver folio 582 del Archivo 001 del expediente digital.

justicia y debido proceso de la señora **Angulo**, dejó sin efectos la sentencia de **3 de mayo de 2019** proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y le ordenó a esa Corporación emitir decisión de reemplazo.

Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia de reemplazo calendada **30 de abril de 2020**⁶, en la cual dispuso modificar el fallo ejecutivo de primera instancia, en el sentido de ordenar seguir adelante con la ejecución por el valor de **ocho millones**, **trescientos setenta y cinco mil, trescientos sesenta y nueve pesos con ochenta y siete centavos (\$8.375.369,87)**, y confirmar las demás decisiones adoptadas en primera instancia, que incluye la condena en costas.

Posteriormente, este Despacho Judicial, en providencia de **24 de mayo de 2021**⁷, ordenó fijar el valor del crédito en (\$ 8.961.645,76) y, señaló como valor insoluto la suma de **quinientos treinta y siete mil, doscientos treinta y dos pesos, con ocho centavos (\$ 537.232,8)** así:

- 1.- FIJAR el valor total del crédito en ocho millones, novecientos sesenta y un mil, seiscientos cuarenta y cinco pesos, con setenta y seis centavos (\$ 8.961.645,76), según lo expuesto.
- 2.- TÉNGASE por constituido a favor de la señora Graciela Angulo Angulo, identificada con cédula de ciudadanía 20.290.094, el título judicial núm. 400100007307468 de 31 de julio de 2019, equivalente a la suma de ocho millones, cuatrocientos veinticuatro mil, cuatrocientos doce pesos, con noventa y seis centavos (\$ 8.424.412,96), el cual deberá ser entregado a la parte actora, a través de los mecanismos puestos a disposición para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Banco Agrario de Colombia.
- 3.- SEÑALAR, como saldo insoluto dentro de la presente ejecución, la suma de quinientos treinta y siete mil, doscientos treinta y dos pesos, con ocho centavos (\$ 537.232,8).

De acuerdo con lo anterior, El despacho en auto de **16 de agosto de 2022**8, dispuso requerir a la Ugpp a fin que se sirvieran allegar al expediente certificación o comprobantes de pago presupuestal por la suma total de \$ 537.232,80 pesos, reconocida por la citada entidad mediante Resolución RDP 018672 de 27 de julio de 2021, por concepto de saldo insoluto de la obligación fijada por el Juzgado en auto de 24 de mayo de 2021.

Posteriormente, y en atención al anterior requerimiento, la entidad ejecutada con memorial de **22 de agosto de 2022**, aportó certificación del pago efectuado a la demandante el 30 de noviembre de 2021, para ello allegó el respectivo comprobante¹⁰, aunque por valor de **\$1.123.508,69**.

⁶ Ver folio 585 del Archivo 001 del expediente digital.

⁷ Ver folio 633 del Archivo 001 del expediente digital.

⁸ Ver Archivo 003 del expediente digital

⁹ Ver Archivo 005 del expediente digital.

Con el fin de resolver lo que corresponde en derecho, conviene recordar que, al tenor de lo normado en el artículo 1626 del Código Civil, «[e]*l pago efectivo es la prestación de lo que se debe*».

En consecuencia, fluye con claridad que el ejercicio de subsunción lógico de los hechos probados en la premisa legal destacada impone concluir que la obligación materia de ejecución fue totalmente cubierta por la **Ugpp**, de manera que, corresponde ahora declarar tal estado de cosas y terminar el proceso por pago, según lo definido por el artículo 461 del CGP.

No obstante, dado que la **Ugpp** sufragó en exceso la cantidad de **\$586.275,89**, como medida de protección al erario, el Juzgado ordenará se envíe a dicha entidad copia de esta providencia y del auto de **24 de mayo de 2021**, con constancia de ejecutoria, **para que se sirva efectuar las gestiones que considere pertinentes en orden a recuperar dichos recursos.**

En mérito de lo expuesto, el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda Oral,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR que la obligación materia de ejecución en la presente controversia ha sido totalmente satisfecha por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con lo considerado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, **TERMINAR el proceso por pago de la obligación**, de acuerdo con el artículo 461 del CGP.

TERCERO.- LEVANTAR toda medida cautelar vigente contra la ejecutada, si hubieren sido decretadas y materializadas. De ser necesario, **ofíciese** en tal sentido.

CUARTO. - REMITIR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP copia de esta providencia y del auto de 24 de mayo de 2021, con sus respectivas constancias de ejecutoria, para que se sirva efectuar las gestiones que considere pertinentes en orden a recuperar dichos recursos.

QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia y satisfecho lo anterior, **archívese** el expediente, previas las constancias de rigor. Por secretaría, **dispóngase** lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica en seguida)

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

JUEZ

MAM /Jo



Página 4 de 4

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 50af7bbacfc65df9023b2d6f42055f4b3b271de1d14915dd18281c4570747dab



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0173-00
DEMANDANTE	NELSON BLANCO PRADA
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contestó la demanda. Ver archivo 009 del expediente digital.

N.R.D. 2022-0173-00 Demandante: NELSON BLANCO PRADA Demandada: Fomag

legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dentro del término de traslado correspondiente, contestó la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 009 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).

Las demás excepciones propuestas por la entidad demandada, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 05 de octubre de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

• Consideraciones.

N.R.D. 2022-0173-00 Demandante: NELSON BLANCO PRADA Demandada: Fomaq

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **5 de octubre de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **5 de octubre de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **11 de octubre de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la

² Ver folio 71 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-322108 de fecha 11-10-2021.

N.R.D. 2022-0173-00 Demandante: NELSON BLANCO PRADA Demandada: Fomag

Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **5 de octubre de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

P ara el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

N.R.D. 2022-0173-00 Demandante: NELSON BLANCO PRADA Demandada: Fomag

TERCERO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINAJuez

CLM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ \bf 03fd4c26fa6dc5bb54cbb11b1c630f478cb63ec578c41237ddbb1f7b8a14208c}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0147-00
DEMANDANTE	JUDITH CARDONA GALLEGO
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE SOACHA FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Soacha¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Soacha, contestaron la demanda. Ver archivo 012, 015 del expediente digital.

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la NACIÓN, - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Visibles en las carpetas 012 y 015 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La **Secretaria de Educación de Soacha,** propuso las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de las pretensiones falta de individualización. (FL. 6).
 - Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de Soacha. (FL. 9).

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

1. Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 8 de septiembre de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **8 de septiembre de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **8 de septiembre de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **21 de septiembre de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación de Soacha, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte demandante, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la **Secretaria de Educación de Soacha**, tal como se observa en el archivo <u>005 del expediente digital.</u>

² Ver folio 69-70 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo aquí expuesto, informo que esta entidad territorial remitió su solicitud a la Fiduprevisora S.A a manera de traslado por competencia con oficio SEM-DAF-P.S N° 762 del 21 de septembre de 2021, radicada en la Plataforma PQRS de La Fiduprevisora con el N° Radicado 20211014155792 del 23 de septiembre de 2021.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de 8 de septiembre de 2021; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

Para el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

De las excepciones propuestas por la Secretaría de Educación de Soacha

 Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de las pretensiones - falta de individualización. estima la parte accionada que:

Atendiendo lo anterior, se vislumbra a todas luces que este requisito no se cumple en el presente medio de control, en razón a que se pretende la nulidad de un acto ficto, el cual nunca se configuró frente a mi representada, esto es Municipio de Soacha, atendiendo a que el Ente territorial sí emitió respuesta de forma oportuna a todas y cada una de las peticiones realizadas por la parte actora, tal y como se manifestó en la contestación de los hechos que antecede, como consta en los documentos que reposan en el expediente y los cuales fueron aportados por la apoderada de la docente CARDONA GALLEGO.

No obstante y atendiendo lo anteriormente expuesto, es preciso reiterar y ponerle de presente a su señoría, que frente al Municipio de Soacha no se puede configurar un

ACTO FICTO, pues a través de los oficios Nos. SOA2021EE010218 Y SEM-DAF-P.S No.735 se emiten respuestas oportunas, de forma clara y precisa a la peticionaria, siendo el mismo contradictorio al momento de cotejar el escrito de la demanda con las pruebas aportadas, creando así confusión; ahora bien, situación distinta señora Juez, es que se pretenda la nulidad del acto ficto que se haya podido configurar por la no respuesta oportuna por parte de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con ocasión al traslado por competencia que se le realizo, lo que permite concluir, que no fue individualizo por parte del accionante, con toda precisión, el acto administrativo del que se pretende su nulidad.

Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que los oficios SOA2021EE010218 de 21 de septiembre de 2021³ y el SEM-DAF-P.S No.735 de la misma data⁴, emitidos por la **Secretaría de Educación de Soacha**, no dan respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte demandante, como quiera que remiten la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia. Por las razones aquí expuestas, podemos establecer que nos encontramos frente a un acto ficto, en tanto, la accionada no brindó respuesta de fondo al pedimento de la parte demandante.

Para la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Secretaria de Educación del Municipio de Soacha, se tendrán los mismos argumentos arriba expuestos y lo preceptuado por el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019⁵.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales y por indebida acumulación de las pretensiones, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fomag y la Secretaría de Educación de Soacha, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 024).

³ Ver folio 69-70 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo aquí expuesto, informo que esta entidad territorial remitió su solicitud a la Fiduprevisora S.A a manera de traslado por competencia con oficio SEM-DAF-P.S N° 762 del 21 de septembre de 2021, radicada en la Plataforma PQRS de La Fiduprevisora con el N° Radicado 20211014155792 del 23 de septiembre de 2021.

⁴ Ver folio 71 del archivo 001 del expediente digital. "En atención a lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 1755 de 2015, de manera atenta y muy respetuosa me permito remitir, por falta de competencia, las siguientes solicitudes de reconocimiento y pago de indemnización moratoria por presunto pago retardado de los intereses a las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2020, así como del retardo en la consignación de las cesantías del año 2020 (anexo 1).

⁵ Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos Santos Alirio Rodríguez Sierra, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.193.283 y T.P. 75.234 del C.S. de la J, como apoderado de la Secretaría de Educación de Soacha, en los términos del poder conferido (f. 15 de la carpeta denominada 012).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:}\ \textbf{ad4cd39f9ecd8f52d047fe47fc6ffadbf3ad52cac41d6464bd4fbc0f4fae9d7b}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0184-00
DEMANDANTE	MARIA ELENA BELTRAN VILLEGAS
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, contestaron la demanda. Ver archivo 013 y 016 del expediente digital.

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 013 y 016 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaría de Educación de Bogotá, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 30 de julio de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

• Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **30 de julio de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **30 de julio de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **23 de agosto de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la

² Ver folio 68 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-273529 de fecha 23-08-2021.

Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

• Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **30 de julio de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

Para el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos José Herrera Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos del poder conferido (f. 18 de la carpeta 016 del expediente digital).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

CLM.



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:}\ \textbf{04b33af9e30cf8b7686a45a1bb3d6382f130af3730ba8bd7f82763d8c6a2333d}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0187-00
DEMANDANTE	NORMA PATRICIA ZAMBRANO HERNANDEZ
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, contestaron la demanda. Ver archivo 013 y 016 del expediente digital.

advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 013 y 016 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaría de Educación de Bogotá, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

1. Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 29 de julio de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

• Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **29 de julio de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **29 de julio de 2021,** está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **23 de agosto de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

² Ver folio 60 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-273529 de fecha 23-08-2021.

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación **no sustentó** el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

• Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **29 de julio de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

Para el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

N.R.D. 2022-0187-00 Demandante: NORMA PATRICIA ZAMBRANO HERNANDEZ Demandada: Fomag

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos José Herrera Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos del poder conferido (f. 18 de la carpeta 016 del expediente digital).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

CLM.



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 10bc5fbd00d36f2b232dde2fb9753501464083483967612099869237982d3191

Documento generado en 12/09/2022 03:44:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0185-00
DEMANDANTE	YOLANDA ECHEVERRY
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, contestaron la demanda. Ver archivo 013 y 016 del expediente digital.

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 013 y 016 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaría de Educación de Bogotá, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 26 de agosto de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

• Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **26 de agosto de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **26 de agosto de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **16 de septiembre de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la

² Ver folio 58 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-298844 de fecha 16-09-2021.

Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

• Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **26 de agosto de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

P ara el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos José Herrera Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la **Secretaría de Educación de Bogotá**, en los términos del poder conferido (f. 18 de

la carpeta denominada 016).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ 5ff5cd74ee669dcc1e070363ead7bbb9fbbd599aa0a1dc997d5f192e7ae598b1}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0188-00
DEMANDANTE	JOSÉ ALEJANDRO DURAN GUZMAN
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la **Nación**, - **Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹,** y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, contestaron la demanda. Ver archivo 013 y 017 del expediente digital.

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 013 y 017 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaría de Educación de Bogotá, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 20 de agosto de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **20 de agosto de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **20 de agosto de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **22 de septiembre de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

² Ver folio 58-59 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-301562 de fecha 22-09-2021.

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **20 de agosto de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

P ara el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos José Herrera Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos del poder conferido (f. 18 de la carpeta denominada 017).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:}\ \textbf{e746cca639b432672db4298fddd45f22abead85805da1d0b99ee8ebf2631db2e}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0190-00
DEMANDANTE	MARÑLENY ESPINOSA MORENO
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, contestaron la demanda. Ver archivo 013 y 017 del expediente digital.

N.R.D. 2022-0190-00 Demandante: Marlene Espinosa Moreno Demandada: Fomag

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación de Bogotá dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Fs. Visible en la carpeta 013 y 017 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaría de Educación de Bogotá, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 13 de septiembre de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

N.R.D. 2022-0190-00 Demandante: Marlene Espinosa Moreno Demandada: Fomag

• Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **13 de septiembre de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **13 de septiembre de 2021,** está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **22 de septiembre de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte actora, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte demandante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la Secretaria de Educación de Bogotá, tal como se observa en el archivo 006 del expediente digital.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

² Ver folio 59-60 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-301562 de fecha 22-09-2021

N.R.D. 2022-0190-00 Demandante: Marlene Espinosa Moreno Demandada: Fomag

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de FOMAG, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

N.R.D. 2022-0190-00 Demandante: Marlene Espinosa Moreno Demandada: Fomag

Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **13 de septiembre de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

P ara el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 014).

N.R.D. 2022-0190-00 Demandante: Marlene Espinosa Moreno Demandada: Fomag

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos José Herrera Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos del poder conferido (f. 18 de la carpeta denominada 017).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ d43647254879027e71ed208ccc533a70efe3d65cbafda5e003330616fc9fbaab}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:20 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	11001-33-35-025-2022-0061-00		
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA	COLOMBIANA	DE
	PENSIONES- COLPENSIONES		
DEMANDADO:	EFRAIN PINEDA PINED	Α	
MEDIO DE CONTROL:	DL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO		

Al revisar el expediente de la referencia, observa este despacho que ninguna de las partes solicitó realizar audiencia de conciliación¹, como tampoco fue allegado memorial con fórmula conciliatoria en este asunto.

En consecuencia y en aplicación del principio de celeridad, el despacho prescindirá de la misma y, por ser procedente, al presentarse en legal término, se concede, en el efecto suspensivo, ante el superior, el recurso de alzada propuesto y sustentado por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Comoquiera que la apelación presentada es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los numerales 1º y 2º del artículo 247 de la misma codificación, el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada en contra de la sentencia proferida por este estrado judicial el 17 de agosto de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta determinación, por Secretaría remítase el expediente al superior para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

MAM

1 Numeral 2 del artículo 247 de la Ley 2080 de 2021.

Expediente 2022-0061 Demandante: Colpensiones Demandado: Efraín Pineda Pineda



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: fd2ebd1b6c0309b940686233512f60415d380d24f4ffcaa8da56e870ced283a0

Documento generado en 12/09/2022 03:44:21 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-00321-00
DEMANDANTE	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
	COLPENSIONES
DEMANDADO	LUZ AMPARO RUIZ GARCIA
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La parte demandante interpuso y sustentó dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (Archivo 019 del expediente digital).

Como quiera que la impugnación presentada es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los numerales 1º y 2º del artículo 247 de la misma codificación, el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: **CONCEDER** en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto

por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por este estrado judicial el 17 de agosto de 2022 que accedió parcialmente a

las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta determinación, por Secretaría remítase el

expediente al superior para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f6a587a14226027c60a9b359a8af63d915bc2e2f03813a0af762d315dace0884**Documento generado en 12/09/2022 03:44:22 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2019-0394-00	
	11001-33-35-025-2020-0020-00 (Acumulado)	
DEMANDANTE	AMANDA ELIZABETH MENDOZA HERRERA	
DEMANDADO	BOGOTA D.C- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL	
	DISTRITO- COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO- CIVIL	
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por **Bogotá D.C-Secretaría de Educación del Distrito** y la **Comisión Nacional del Servicio-Civil-CNSC**, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, las accionadas, Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito y la Comisión Nacional del Servicio- Civil- CNSC, dentro del

N.R.D. 2019-0394 2020-0020 Demandante: Amanda Elizabeth Mendoza Demandada: CNSC

término de traslado correspondiente, **contestaron la demanda en término**, tanto para la primera demanda (2019-0394) como para la demanda acumulada (2020-0020).

De las excepciones propuestas

Proceso 2019-394. (Archivo 008 del expediente digital)

- La Comisión Nacional del Servicio- Civil- CNSC, propuso las siguientes excepciones previas:
- Inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad conforme los presupuestos legales. (fl. 6).
- Inepta demanda por proposición jurídica incompleta. (fl.9).
- Falta de legitimación en la causa por pasiva en cuanto al pago de salarios. (fl.9).
- La Secretaría de Educación del Distrito, no propuso excepciones previas.

Proceso 2020-0020. (Archivo 018 y 020 del expediente digital)

- La **Secretaría de Educación del Distrito**¹, no propuso excepciones previas.
- La Comisión Nacional del Servicio- Civil- CNSC², propuso la siguiente excepción previa:
- Falta de legitimación en la causa por pasiva en cuanto al pago de salarios.
 (fl.4).

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

De las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser una excepción mixta, se estudiará al momento de proferir sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta que el medio exceptivo de ineptitud sustitutiva de la demanda, tiene la calidad de previa, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

1. Inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad conforme los presupuestos legales. La entidad demandada, estima que:

^{1 (}Archivo 018 del expediente digital).

^{2 (}Archivo 020 del expediente digital).

N.R.D. 2019-0394 2020-0020 Demandante: Amanda Elizabeth Mendoza Demandada: CNSC

Ahora, la señora Amanda Elizabeth Mendoza Herrera a través de apoderado judicial, el día 5 de julio de 2019 radicó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial, que conoció la Procuraduría 83 Judicial I para Asuntos Administrativos. La audiencia de conciliación extrajudicial se programó para el día 6 de septiembre de 2019, a la cual acudieron los apoderados judiciales de las entidades convocadas, pero en la medida que el apoderado judicial de la parte demandante no acudió a la diligencia se le concedió el término de los tres (3) días para que justificara su ausencia, los cuales se cumplieron el día 11 de septiembre de ese año; no obstante, dentro de dicho término no hubo pronunciamiento, razón por la cual la Procuraduría dio por agotado el requisito de procedibilidad y el día 12 de septiembre de 2019 expidió la constancia de que tratan el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015.

En este orden y en atención a las normas transcritas se tiene que, en el particular el término de los tres (3) meses para tener por agotado el requisito de procedibilidad contados desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, se hubieran cumplido el 5 de octubre de 2019, por lo tanto, este no fue el presupuesto que se dio para que la parte convocante hubiera podido acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que lo primero fue la celebración de la audiencia de conciliación. Es decir que, el requisito de procedibilidad se cumplió hasta el 12 de septiembre de 2019 cuando la Procuraduría expidió la correspondiente constancia.

Sin embargo, conforme se evidencia en el Acta Individual de Reparto, la hoy parte demandante instauró demanda con el fin de promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el día 6 de septiembre de 2019, fecha para la cual no solo se encontraba programada la audiencia de conciliación extrajudicial, la cual tuvo lugar ese día, sino que, el requisito de procedibilidad no se había cumplido, en la medida que ante la ausencia de la parte convocante, aquel se cumplió en los términos de ley, el 12 de septiembre de 2019.

Consideraciones.

En atención a lo manifestado por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el medio exceptivo planteado, esta Judicatura señala que el mismo no tiene vocación de prosperidad, como quiera que sin bien, con la demanda no se presentó el acta de conciliación extrajudicial, no es menos cierto, que con la subsanación de la misma³, se allegó el Acta de no conciliación de 12 de septiembre de 2019, por medio del cual la Procuraduría 83 Judicial I Para Asuntos Administrativos de Bogotá, declaró fallida la misma, y dio por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Sumado a lo anterior, se evidencia que en la citada audiencia de conciliación se citó a todas y cada una de las entidades aquí demandadas, esto es, **Bogotá D.C-Secretaría de Educación del Distrito** y la **Comisión Nacional del Servicio-Civil.**

Finalmente, si la discusión gira en torno a la **caducidad**, es menester señalar que la Resolución No. 20192310010845 de 25 de febrero de 2015⁴, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, por medio de la cual se resuelve un

³ Ver Archivo 005 del expediente digital.

⁴ Ver folio 29 Archivo 002 del expediente digital.

recurso de apelación en contra de la Resolución No. 7439 de 3 de septiembre de 208, quedó ejecutoriada el **11 de marzo de 2019**⁵, por lo tanto, y teniendo en cuenta que el término se suspendió el **5 de julio de 2019**, con la presentación de la solicitud ante la Procuraduría, y se volvió a reanudar el **12 de septiembre de 2019**, la actora tenía hasta el **23 de septiembre de 2019**, sin embargo, la presentó el **6 de septiembre de 2019**. Por las razones expuestas es menester señalar que no operó el término de caducidad.

2. Inepta demanda por proposición jurídica incompleta. La entidad demandada, estima que:

"La parte demandante a través del libelo introductorio pretende la nulidad de las Resoluciones No. 7439 del 3 septiembre de 2018 y 8666 del 10 de octubre de 2018, expedidas por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por medio de las cuales se negó su inscripción en el Escalafón Docente, así como de la Resolución No. CNSC – 20192310010845 del 25 de febrero de 2019, expedida por la CNSC, a través de la que se confirmó la decisión de negar la mencionada inscripción.

Sin embargo, aun cuando se reclama a título de restablecimiento del derecho a favor de la señora Amanda Elizabeth Mendoza Herrera, el pago de salarios, cesantías, primas, pagos a seguridad social y todas las prestaciones económicas dejadas de percibir, desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha en que se efectúe el reintegro, no se evidencia reparo alguno frente al acto administrativo que dio por terminada su vinculación con la Administración, aun cuando de esa relación legal y reglamentaria que se deprende de la resolución de nombramiento expedida por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, esto es, la Resolución No. 16556 del 12 de septiembre de 2016, se soporta esa pretensión.

En este orden de ideas, el acto administrativo antes relacionado es una decisión que afecta la situación jurídica particular y concreta de la demandante en los términos de sus pretensiones y por eso mismo lo debió acusar oportunamente, y no lo hizo, motivo por el cual la demanda se presentó de manera incompleta y por consiguiente, se encuentra incursa en la excepción de ineptitud sustancial de la demanda.

Consideraciones.

De conformidad con lo señalado por la CNSC, el Despacho considera que la misma, no tiene vocación de prosperidad como quiera que, de las pretensiones de la demanda, especialmente del proceso acumulado, esto es, el 11001-33-35-025-2020-0020-00, se evidencia que se demandó el acto administrativo que dio por terminada la vinculación de la demandante con la entidad, esto es, la Resolución **No. 2166 de 05 de agosto de 2019**⁶, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito Capital, mediante la cual se revoca el nombramiento en periodo de prueba en la planta de personal docente a la señora Amanda Elizabeth Mendoza Herrera.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

⁵ Ver Resolución No. 2166 de 5 de agosto de 2019, archivo 024-2020-000020.

⁶ Ver folio 19 del archivo denominado 024-2020-00020 del expediente digital.

N.R.D. 2019-0394 2020-0020 Demandante: Amanda Elizabeth Mendoza Demandada: CNSC

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas Inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad conforme los presupuestos legales e Inepta demanda por proposición jurídica incompleta, propuestas por la Comisión del Servicio Civil- CNSC, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Mónica Amparo Mantilla Navarrete, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.454.477 y T.P. 127.892 del C.S. de la J, como apoderada de la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, en los términos del poder conferido (f. 24 de la carpeta denominada 008).

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA a la Abogada Viviana Carolina Rodríguez Prieto, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.032.471.577 y T.P. 342.450 del C.S. de la J, como apoderada de la Secretaría de Educación Distrital, en los términos del poder conferido (f. 79 de la carpeta denominada 008).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 29ffc55588a5bffa42fb0a6bc3a203060b989d54bb51849372bfa050fc898ecc

Documento generado en 12/09/2022 03:44:23 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2019-00357-00
DEMANDANTE	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO
DEMANDADO(A)	NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO
	NACIONAL
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ha venido el proceso al Despacho una vez incorporado el video de la audiencia de pruebas¹ allegado por la parte demandante en Memorial de 23 de julio de 2021², al expediente de la referencia, de conformidad con la informe secretaria que antecede este auto.

Ahora bien, observa el Despacho que cuenta con las pruebas suficientes para resolver el problema jurídico del proceso de la referencia, razón por la cual, bajo la facultad de restringir los testimonios, y en vista que cuenta con varias testimoniales y pruebas aportadas dentro del proceso, de conformidad con el artículo 212 del CGP, limitará el testimonio del señor Fabián Enrique Aguilera.

Así las cosas, con el fin de procurar el menor desgaste para las partes, en virtud de los principios de celeridad y eficiencia de que tratan los artículos 4 y 7 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el deber de promover la mayor economía procesal previsto en el 42.1 del CGP el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda – Oral,

RESUELVE

- **1.- INCORPORAR** las pruebas de oficio allegadas mediante correo electrónico del 23 de julio de 2021, visibles en la carpeta 020 folios 5 al 8 y el video de la audiencia de pruebas visible en la carpeta 025 del expediente digital.
- **2.- PONER** a disposición de las partes dichos documentos, para lo cual, podrán el acceder al expediente completo, disponible temporalmente <u>aquí</u>³.

¹ Video de Audiencia de Pruebas Juzgado 52 Administrativo.

² Visible en Carpeta 020 del Expediente Digital.

³ Si el hipervínculo no funciona, copie la siguiente dirección electrónica en su navegador web: 110013335025-2019-00357-00

- **3.-** Como quiera que no hay más pruebas por practicar, **CERRAR** la etapa probatoria correspondiente a la primera instancia.
- **4.- CORRER TRASLADO** a las partes por el **término de diez (10) días** siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, a fin de que se sirvan rendir sus alegatos de conclusión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

ADL



Página 2 de 2

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-0229-00
DEMANDANTE	JANER MAURCIO GUERRERO GRIZALES
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - CAJA
	PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Vencidos los términos de que tratan los artículos 172 y 173 del CPACA, sería del caso fijar fecha y hora para realizarla audiencia inicial de que trata el artículo 180 *ibidem*, no obstante, la actuación guarda correspondencia con lo preceptuado en los literales a), b) y c) del numeral primero del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021:

"Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

- 1. Antes de la audiencia inicial:
- a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho:
- b) Cuando no haya que practicar pruebas;
- c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
- d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

[...]"

Así las cosas, como quiera que en la presente controversia el asunto es de puro derecho y las pruebas necesarias para proferir una decisión de fondo fueron allegadas con la demanda, y sobre ellas no se formuló tacha alguna, en esta oportunidad es procedente dar aplicación a la norma trascrita y dictar sentencia anticipada.

Por consiguiente, de conformidad con la norma en comento y en amplia garantía del derecho al debido proceso de los implicados y como una medida de dirección procesal¹,

¹ Artículo art. 29 CP y art. 42.1 CGP

previo a correr traslado para alegar de conclusión, el Juzgado fijará el litigio y, en seguida, identificará e incorporará los medios de prueba que conformarán el material de evidencia para la solución de la controversia, probanzas que, aunque ya son conocidas por las partes, estarán disponibles para ser consultadas en medio digital, a través del respectivo hipervínculo, las anteriores medidas se imparten en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Así mismo, el Despacho ejercerá el control de legalidad que corresponde, según lo normado por el artículo 207 del CPACA.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. Sentencia Anticipada: ANUNCIAR que en la presente controversia será proferida sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA.

SEGUNDO. Fijación del Litigio: De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Judicatura estudiará la configuración de la excepción previa de *caducidad* del presente medio de control, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 3º del artículo 182ª de la Ley 2080 de 2021.

TERCERO. Pruebas: TENER e **INCORPORAR** como pruebas, con el valor legal que la ley les otorga, las aportadas con la demanda y la contestación de la misma.

De la parte demandante.

- **1.** Copia de la petición de 28 de octubre de 2021, dirigida a la Caja General de la Caja de Honor. (Archivo 002, fl. 14-15).
- **2.** Copia del Oficio No. 03-01-20200205004360 de 5 de febrero de 2020. (Archivo 002, fl. 16-18).
- **3.** Copia del recurso de reposición y en subsidio apelación presentado, el 21 de febrero de 2020, ante la Caja General de la Caja de Honor. (Archivo 002, fl. 19-21).
- **4.** Copia de la contestación al recurso de reposición y en subsidio apelación con radicado 03-01-20200330012325 de 3 de marzo de 2020. la Caja General de la Caja de Honor. (Archivo 002, fl. 22-23).

De la parte demandada.

1. Expediente administrativo. (Archivo 023, fl. 1 ver pruebas que militan en el correo electrónico).

De las pruebas solicitadas con la demanda y la contestación de la misma.

En cuanto a las pruebas solicitadas por ambos extremos Litis, este Despacho debe verificar si las mismas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, a fin de que puedan ser decretadas y tenidas en cuenta para efectos de demostrar los hechos que en la demanda se mencionan y que sirven de fundamento a las pretensiones, y así lograr emitir concepto del fondo del asunto.

Sobre el particular debe tenerse en cuenta que el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en el sentido de indicar que:

«...la doctrina ha clasificado los requisitos para la admisión de las pruebas en extrínsecos (generales para cualquier medio de prueba) e intrínsecos (según el medio de prueba de que se trate). Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 168 del Código General del Proceso y se refieren a: 1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso. 2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho. 3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales. 4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.»²

Es decir, que el juez debe clasificar las pruebas solicitadas de acuerdo a su conducencia, pertinencia y utilidad para establecer si las decreta o no, teniendo en cuenta que ellas sirvan para esclarecer los hechos de la demanda.

Por otra parte, debe anotarse que la necesidad de una prueba radica en que ésta sea relevante para llevar al juez al grado de convencimiento suficiente para que pueda solucionar el problema objeto de litigio y demostrar los hechos que son tema de prueba en el proceso.

Del análisis del proceso se advierte que analizadas las pruebas que obran dentro del expediente, esta célula judicial declarará probada la excepción previa de caducidad, por lo tanto, no se hace necesario el decreto y practica de pruebas solicitadas con el libelo demandatorio como con la contestación de la misma. Razón por la cual se **NIEGA** el decreto de práctica de pruebas solicitadas.

CUARTO. Consulta del Expediente: PONER a disposición de las partes y del Ministerio Público el expediente completo de la presente controversia en medio digital, que podrá ser consultado aquí³.

QUINTO. Alegatos de Conclusión: una vez ejecutoriado este auto, CORRER traslado a las partes por el término de diez (10) días, a fin de que se sirvan rendir sus alegatos de conclusión por escrito.

El señor Agente del Ministerio Público, si a bien lo tiene, podrá presentar concepto dentro del término dispuesto en el párrafo anterior.

SEXTO. Término de Decisión: ADVERTIR que la sentencia anticipada será proferida por escrito, dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento de la oportunidad para alegar de conclusión.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia de 8 de junio de 2016. Radicado N° 110010328000201600001-00

³ Si el hipervínculo no funciona, copie la siguiente dirección electrónica en su navegador web: <u>110013335025-2021-00229-00</u>

N.R.D. 2021-00229-00 Demandante: JANNER MAURICIO GUERRERO GRIZALAEZ Demandada: MIN DEFENSA

SÉPTIMO. Control de Legalidad: según lo prevé el artículo 207 del CPACA, una vez revisada la actuación, no se encuentra causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, están dados los presupuestos procesales para continuar con el trámite procesal, y tampoco se avizora que deba proferirse sentencia inhibitoria.

OCTAVO: Notificar la presente providencia mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 2080 de 2021 que modificó el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

MAM



Página 4 de 4

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 1fa5e4c27ffe1338b23f9cd0d30cf970fdace06879770c1c73b22d36dfbe508f



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-00174-00
DEMANDANTE	MARIAM CORDOBA BOLIVAR
DEMANDADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA
	DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Las partes interpusieron y sustentaron dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (PDF 020SentenciaPrimeraInstancia del expediente digital).

Como quiera que la impugnación presentada es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los numerales 1º y 2º del artículo 247 de la misma codificación, el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: **CONCEDER** en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto

tanto por la parte demandante¹ como por la parte demandada² en contra de la sentencia proferida por este estrado judicial el 29 de junio de 2022 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta determinación, por Secretaría remítase el

expediente al superior para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

CLM.

¹ Archivo 028 del expediente digital recurso de apelación presentado por la demandante.

² Archivo 025 del expediente digital Recurso de apelación presentado por la parte demandada.



Firmado Por: Antonio Jose Reyes Medina Juez Circuito Juzgado Administrativo Sala 025 Contencioso Admsección 2 Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 80f20983001b488102c8189454e34656321e18fb42823d8f15231423acc8824a Documento generado en 12/09/2022 03:44:26 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2022-0137-00
DEMANDANTE	ETEL MÓNICA LUENGAS RAMÍREZ
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
	SOCIALES DEL MAGISTERIO - SECRETARIA DE
	EDUCACIÓN DE BOGOTÁ- FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Agotado el término de traslado de las excepciones propuestas por la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación Distrital¹, y a efectos de dar continuidad al trámite procesal correspondiente, procederá el Despacho a indicar que sería el caso anunciar sentencia anticipada, sin embargo, es pertinente indicar que la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción" estableció en el artículo 38 el trámite que se debe surtir para la resolución de las excepciones previas así:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas

¹ De conformidad con lo obrante en el expediente, la Nación, - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de Educación Distrital, contestaron la demanda. Ver archivo 024, 027 del expediente digital.

N.R.D. 2022-0137-00 Demandante: Etel Mónica Luengas Ramírez Demandada: Fomag

mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

Revisado el expediente, la NACIÓN, - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN dentro del término de traslado correspondiente, contestaron la demanda en término. (Visibles en las carpetas 024-027 del expediente digital).

De las excepciones propuestas:

- La Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, propusieron las siguientes excepciones previas:
 - Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (FI.28)
 - Falta de Legitimación en la causa por pasiva. (Fl.29).
 - Prescripción. (Fl. 30).
 - Caducidad. (Fl. 30).
- La Secretaria de Educación, no propuso excepciones previas.

Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, no corresponden a las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y, se resolverán en el estudio de fondo del asunto, de conformidad el inciso 4 del parágrafo dos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, **se declararán fundadas mediante sentencia anticipada**, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."

No obstante, teniendo en cuenta que los medios exceptivos de: i) Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva, iii) Prescripción y, iv) Caducidad, tienen la calidad de previos, se entrará a resolver en esta etapa procesal.

- Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.
 Estima la parte accionada que:
 - "1. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2021, frente a la petición presentada ante la Secretaria de Educación de Bogotá, el día 06 DE AGOSTO DE 2021"

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 6 de agosto de 2021 ante el ente territorial.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, y la misma se encuentra en el libelo demandatorio.

N.R.D. 2022-0137-00 Demandante: Etel Mónica Luengas Ramírez Demandada: Fomaq

• Consideraciones.

Al respecto, señala este Despacho que la excepción alegada no tiene vocación de prosperidad, como quiera, que dentro el plenario no obra respuesta por la entidad demandada a la petición deprecada por la parte actora el **6 de agosto de 2021**, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,

Además, causa extrañeza que el extremo pasivo de esta Litis, se limita a señalar que la respuesta a la petición de **6 de agosto de 2021**, está dentro del libelo demandatorio, más no lo individualiza y/o especifica.

Ahora bien, si se hace referencia al oficio de **23 de agosto de 2021**, emitido por la Secretaría de Educación del Distrito, el mismo, no da respuesta de fondo a la petición instaurada por la parte demandante, como quiera que la entidad remite la solicitud a la Fiduciaria para lo de su competencia².

Conforme a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto ficto, por cuanto, el extremo pasivo, no ha dado respuesta a la solicitud instaurada por la parte actora.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag: estima la parte accionada que:

"Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (...)" Cabe destacar que la calidad de empleador no se comparte de ninguna forma con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que como se citó en párrafos precedentes es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, y está a cargo del pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

• Consideraciones.

Es menester señalar, que la admisión de la demanda fue dirigida igualmente, contra la **Secretaria de Educación de Bogotá**, tal como se observa en el archivo <u>016 del expediente digital.</u>

Ahora bien, debemos tener en cuenta que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, la norma cambio el panorama de las sanciones moratorias en términos de responsabilidad, pues en su artículo 57 parágrafo estableció:

"(...) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

² Ver folio 59 del archivo 001 del expediente digital. "Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No S-2021-273529 de fecha 23-08-2021.

N.R.D. 2022-0137-00 Demandante: Etel Mónica Luengas Ramírez Demandada: Fomag

Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

Y es por esta razón que las moras generadas a partir de 2020 pueden ser responsabilidad de la Secretaria de Educación.

De lo anterior se infiere que en los actos administrativos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial en el cual presta sus servicios la docente peticionaria mediante la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y la Fiduciaria quien administra los recursos del Fondo que se encarga de aprobar o improbar el proyecto de resolución conforme a la documentación aportada.

No obstante, es al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante, a través de la Secretaría de Educación. Aunado a lo anterior precisa que la Ley 962 de 2005, tuvo por objeto simplificar los trámites de los particulares ante la administración dada la complejidad que los caracterizaba, sin que este presupuesto separara la competencia del Fondo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, lo cual es afirmado por el artículo 56 de la ley referenciada.

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como facilitadores para que los Docentes Nacionalizados tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de Fomag, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, el Despacho considera que esta excepción carece de vocación de prosperidad, toda vez que, el ente territorial ya se encuentra vinculado al presente trámite procesal y, por otro lado, está más que decantada la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,** por cuanto, es quien se le dio la función de expedir el acto administrativo por el que se dispone el pago de la prestación del docente solicitante.

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Caducidad. Es pertinente señalar que la parte demandada en su escrito de contestación no sustentó el medio exceptivo, solo se limitó a indicar que se contabilizara la caducidad a partir del acto expreso que negó el reconocimiento de la sanción mora.

N.R.D. 2022-0137-00 Demandante: Etel Mónica Luengas Ramírez Demandada: Fomag

• Consideraciones.

Conforme a las pruebas que militan en el expediente evidencia esta Judicatura que la parte actora solicita la nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación a la petición de **6 de agosto de 2021**; es decir, que en la presente demanda nos encontramos frente a un acto administrativo negativo.

Para el caso, nos encontramos con pretensiones que versan sobre actos producto del silencio administrativo, es decir que se originan en un acto ficto o presunto, derivado de la omisión de la demandada en dar curso al pronunciamiento que debió ameritar una respuesta de fondo a la demandante.

Es así que, realizando un análisis normativo y jurisprudencial sobre la caducidad, que, conformado con lo obrante en el proceso, se verifica la existencia de un Acto Administrativo Ficto o presunto, lo cual, en relación al término para demandar, nos permite concluir de manera diáfana, que para el caso sub examine, se tendrá en cuenta lo consagrado en el numeral 1, literal d del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no procede la caducidad del medio de control

Por las razones expuestas, se declara no probada la excepción de caducidad.

4. PRESCRIPCIÓN: En relación con esta excepción se debe precisar que solamente es procedente cuando sea de carácter extintiva, que es la señalada taxativamente en la norma, no obstante, lo anterior, de las pretensiones de la demanda se evidencia que la parte actora está solicitando las cesantías del año 2020, es decir, que, siguiendo los postulados jurisprudenciales, el extremo activo de esta Litis aún está en tiempo para solicitar dicho reconocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, al no encontrarse probada ninguna excepción de carácter previo, se da por concluida esta etapa procesal, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, propuestas por NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora Jenny Katherine Ramírez Rubio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.570.557 y T.P. 310.344 del C.S. de la J, como apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos del poder conferido (f. 33-34 de la carpeta denominada 024).

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al Doctor Carlos **José Herrera Castañeda**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.623 y

N.R.D. 2022-0137-00 Demandante: Etel Mónica Luengas Ramírez

Demandada: Fomag

T.P. 141.955 del C.S. de la J, como apoderado de la **Secretaría de Educación Distrital**, en los términos del poder conferido (f. 18 de la carpeta denominada 027).

CUARTO: Ejecutoriada la providencia, ingrésese para proveer.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA

Juez

MAM



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\sf C\'odigo\ de\ verificaci\'on:\ \bf 2393e72db3cb8ec28040bb5f29f8c3454e58bd1c42b8e1656abab34043c7a94b}$

Documento generado en 12/09/2022 03:44:27 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-00059-00	
DEMANDANTE	MARÍA DEL ROSARIO DURÁN JARAMILLO	
DEMANDADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA	
	DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	

Procede el Despacho a resolver las solicitudes de adición y aclaración de sentencia promovidas por la parte actora.

1. Las solicitudes.

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la demandante presentó solicitud de adición y, en subsidio, aclaración de sentencia [027], toda vez que "se limitó a reconocer y ordenar el pago de las prestaciones sociales, pero no se resolvió sobre las demás pretensiones de la demanda, referidas al reconocimiento y pago de los factores salariales".

En defecto de la adición, se orienta a obtener la aclaración del concepto "prestaciones sociales" contenido en la parte decisoria del fallo "en el sentido que el mismo incluye los factores salariales, tales como prima técnica, prima de servicios y bonificación por servicios prestados, los cuales son acreencias laborales ordinarias y comunes que a modo de restablecimiento del derecho le asiste a la demandante".

2. Consideraciones.

2.1. Oportunidad.

El memorial fue radicado dentro del término de ejecutoria de la sentencia de 17 de mayo de 2022, y por tal razón, de conformidad con los artículos 285 y 287 del CGP, resulta oportuno.

2.2. De la adición de sentencia.

El instituto de adición de providencias fue consagrado por el artículo 287 del CGP, y resulta procedente cuando "la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento", acto que deberá materializarse a través de sentencia complementaria.

En el caso sub examine la demandante considera que el aludido fallo "se limitó a reconocer y ordenar el pago de las prestaciones sociales, pero no se resolvió sobre las demás pretensiones de la demanda, referidas al reconocimiento y pago de los factores salariales"; no obstante, soslaya que el ejercicio resolutivo, incluido el ordinal "SÉPTIMO" de la parte resolutiva de la decisión, tiene como fundamento una muy comprensiva argumentación legal y jurisprudencial que lo soporta, a partir del cual, el Juzgado dispuso restablecer los derechos de la actora con el reconocimiento de las prestaciones sociales ordinarias y especiales que se hubieren podido causar, excluyendo cualquier tipo de reconocimiento de salario y factor salarial.

Ello es así, con estricto apego a las sentencias de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005- 16 y SUJ-025-CE-S2-2021, ampliamente citadas en el fallo de primera instancia, última de las cuales enuncia:

- "95. Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece, de manera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional, ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral.
- 96. Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que, si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
- 97. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala reúne las siguientes manifestaciones, que habrán de servirle al juez contencioso-administrativo como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación contractual."

Por consiguiente, ha de estarse a la parte considerativa de la providencia, en la que se advirtió:

- "Siendo así, el Juzgado encuentra probado el ejercicio continuamente subordinado y dependiente de las funciones profesionales de trabajadora social ejercidas por la señora Córdoba Bolívar, lo que, sumado a los elementos de prestación personal del servicio y remuneración previamente decantados, impone concluir que entre ella y la Administración existió una relación laboral subordinada durante los siguientes lapsos:
- [...]
 Por ende, la señora Córdoba Bolívar tiene derecho al reconocimiento y pago de las correspondientes prestaciones sociales especiales y ordinarias no prescritas.

Se aclara que tales reconocimientos, han de ser liquidados con el valor de los honorarios pactados, como quiera que la pluricitada sentencia de unificación dejó claro que "[p]ese a hallarse probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las

formalidades [prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia], destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la condición de empleado público, ya que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior", premisa que el Despacho hace suya y que guiará las órdenes de restablecimiento a que haya lugar.

Finalmente, como lo tiene dicho la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, el reconocimiento de existencia de la relación de trabajo subordinada no le otorga a la parte demandante la condición de empleado público." (Destaca el Despacho)

Aspecto que, en franca congruencia, dio origen a la resolutiva en la que fue ordenado el pago de prestaciones sociales y negadas las demás pretensiones de la demanda, dentro de las cuales, como es apenas natural, se encuentra el reconocimiento de salario o factores salariales, razón por la cual, la adición pedida no encuentra sustento de hecho que la haga prospera, y ha de ser despachada de manera desfavorable.

No sobra aclarar que, la accionante cuenta con la oportunidad de impugnar la sentencia en el aspecto cuya añadidura requiere, si así lo considera pertinente.

2.3. De la aclaración de sentencia.

De acuerdo con el artículo 285 del CGP, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la profirió, sin embargo "podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella".

En la presente oportunidad la demandante requiere se aclare el concepto "prestaciones sociales" contenido en la parte decisoria del fallo "en el sentido que el mismo incluye los factores salariales, tales como prima técnica, prima de servicios y bonificación por servicios prestados, los cuales son acreencias laborales ordinarias y comunes que a modo de restablecimiento del derecho le asiste a la demandante".

Para el Despacho, el término "prestaciones sociales" corresponde a una tipología de emolumento previsto en las leyes y los reglamentos que no es confundible ni homologables a otro tipo de recompensas que guardan carácter salarial, de manera que la petición de explicación de aquella expresión no encuentra asidero lógico material que haga necesaria alguna intervención en orden a dilucidar el alcance de lo definido en la parte decisoria de la sentencia de primera instancia.

2.4. Precisión ulterior – término para impugnar la sentencia.

El artículo 243 del CPACA prevé que el recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia "deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación"; sin embargo, en vista de las solicitudes de adición y aclaración formuladas, se impone estar al contenido del Auto de unificación jurisprudencial de 12 de abril de 2018¹, en el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado despachó la siguiente subregla de interpretación normativa:

¹ Consejo de Estado (sección segunda), expediente 25000-23-42-000-2014-04339-01 (3223-17).

"Primero: Unificar su postura interpretativa frente a los siguientes aspectos jurídicos:

El término para interponer el recurso de apelación contra una sentencia proferida dentro del procedimiento ordinario regulado por el CPACA, cuando la solicitud de su adición es negada después del cómputo de la ejecutoria inicial del fallo, es de diez (10) días contados a partir de la notificación de la providencia que así lo resuelve. Lo anterior, bajo un criterio de interpretación pro homine de los artículos 247 ordinal 1.º del CPACA, y 287 – inciso final- y 322 ordinal 2.º inciso 2 del CGP."

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda – Oral**,

RESUELVE:

- **1°. NEGAR** las solicitudes de adición y aclaración formuladas respecto de la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022, dentro del expediente de la referencia.
- 2°. ACLARAR que el termino para promover recurso de apelación contra el aludido fallo es de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto.
- **3°.** Agotado el término de que trata el numeral anterior, **reingrese** el expediente al Despacho, para lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

mas



4

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá D.C. Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-0332-00
DEMANDANTE	MARTHA NELLY MOLINA
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA- FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Estando el expediente de la referencia al Despacho, y antes de proferir sentencia de fondo, se advierte sobre la posible configuración de una nulidad procesal, por indebida notificación del auto admisorio de la demanda al Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación de Cundinamarca; por consiguiente, se ordenará poner en conocimiento al citado ente territorial, previa las siguiente.

ANTECEDENTES

- 1. La señora Martha Nelly Molina, por medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación de Cundinamarca y Fiduciaria la Previsora S.A, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.
- 2. Por reparto ordinario le correspondió a este Despacho conocer del presente medio de control, tal como se desprende el acta que milita en el archivo 003 del expediente digital.
- 3. Posteriormente y por cumplir los requisitos de ley, este Juzgado a través de auto de 2 de noviembre de 2021, admitió la demanda y ordenó que por la Secretaría del Despacho se efectuarán las notificaciones de ley; las cuales se llevaron a cabo tal como se evidencia en el archivo 007 del expediente digital.
- 4. Cumplidos los términos de ley, esta célula judicial, resolvió las excepciones propuestas por los extremos de la Litis¹ y corrió traslado para alegar de conclusión a las partes².

¹ Ver archivo 016 del expediente digital

N.R.D. 2021-00332 Demandante: Martha Nelly Molina Demandada: Fomag

5. No obstante, estando el expediente para dictar sentencia de fondo, se percata el Despacho que la notificación del auto admisorio de la demanda al Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación de Cundinamarca, no se efectuó al correo electrónico dispuesto para tal fin, tal como se observa de la siguiente captura de pantalla.

NOTIFICACIÓN PERSONAL ADMISIÓN DEMANDA 11001333502520210033200

Juzgado 25 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin25bta@notificacionesrj.gov.co>

Vie 12/11/2021 3:10 PM

CC: marnemol@hotmail.com <marnemol@hotmail.com>; Alixamanda Rodriguez Soto <notificacionescundinamarcalqab@gmail.com>

Por las razones expuestas, el Juzgado ordenará que, por la Secretaría del Despacho, se ponga en conocimiento del Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación de Cundinamarca, sobre la posible configuración de una nulidad procesal, para que se manifieste si a bien lo tiene, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 137³ del Código General del Proceso.

En consecuencia, se

RESUELVE

PRIMERO: **PONER** en conocimiento del Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación de Cundinamarca, sobre la posible configuración de una nulidad procesal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Vencidos los términos de ley ingrese al Despacho para lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA Juez

МАМ

² Ver archivo 025 del expediente digital.

³ ARTÍCULO 137. ADVERTENCIA DE LA NULIDAD. <Artículo corregido por el artículo 4 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En cualquier estado del proceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará.

N.R.D. 2021-00332 Demandante: Martha Nelly Molina Demandada: Fomag



Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 81b91ac02993b82a080a803ba60a4d32d9260ba3d0f448b7b14f6071754db783

Documento generado en 12/09/2022 03:44:29 PM



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL

Bogotá D.C., Doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO No.	11001-33-35-025-2021-00335-00
DEMANDANTE	OMAIRA CARDONA DUQUE
DEMANDADO	NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
	DEL MAGISTERIO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	DE SOACHA – FIDUPREVISORA S.A.
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Vencidos los términos de que tratan los artículos 172 y 173 del CPACA, sería del caso fijar fecha y hora para realizarla audiencia inicial de que trata el artículo 180 *ibidem*, no obstante, la actuación guarda correspondencia con lo preceptuado en los literales a), b) y c) del numeral primero del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021:

"Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

- 1. Antes de la audiencia inicial:
- a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
- b) Cuando no haya que practicar pruebas;
- c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
- d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

[...]"

Así las cosas, como quiera que en la presente controversia el asunto es de puro derecho y las pruebas necesarias para proferir una decisión de fondo fueron allegadas con la demanda, y sobre ellas no se formuló tacha alguna, en esta oportunidad es procedente dar aplicación a la norma trascrita y dictar sentencia anticipada.

Por consiguiente, de conformidad con la norma en comento y en amplia garantía del derecho al debido proceso de los implicados y como una medida de dirección procesal¹, previo a correr traslado para alegar de conclusión, el Juzgado fijará el litigio y, en seguida, identificará e incorporará los medios de prueba que conformarán el material de evidencia para la solución de la controversia, probanzas que, aunque ya son conocidas por las partes, estarán disponibles para ser consultadas en medio digital, a través del respectivo hipervínculo, las anteriores medidas se imparten en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Así mismo, el Despacho ejercerá el control de legalidad que corresponde, según lo normado por el artículo 207 del CPACA.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. Sentencia Anticipada: ANUNCIAR que en la presente controversia será proferida sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA.

SEGUNDO. Fijación del Litigio: la controversia se contrae a determinar si la demandante, en su condición de docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria como consecuencia del pago tardío de las cesantías establecida en la ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

TERCERO. Pruebas: TENER e **INCORPORAR** como pruebas, con el valor legal que la ley les otorga, las siguientes:

Por la parte demandante:

- Copia Resolución, mediante la cual reconoce y ordena el pago de las cesantías parciales. (fs.26-29 del archivo 001 del expediente digital).
- Recibo de pago emitido por el BBVA. (f.31 del archivo 001 del expediente digital)
- Copia de la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. (fs.22-25 del archivo 001 del expediente digital)
- Copia de la Conciliación extrajudicial ante la Procuraduría II Judicial para asuntos administrativos. (f. 32-35 del archivo 001 del expediente digital).
- Copia de la certificación expedida por el Fomag, donde consta cuando se puso a disposición el pago de las cesantías a la parte demandante. (f.6 del archivo 010 del expediente digital).

Por la parte demandada. Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (Archivo 018). No aportó pruebas al plenario.

Por la parte demandada. Fiduciaria la Previsora S.A. (Archivo 019).

• Certificado de pago expedido por el Fomag. (f.19 del archivo 010 del expediente digital).

¹ Artículo art. 29 CP y art. 42.1 CGP

Por la parte demandada. Municipio de Soacha. (Archivo 022).

1. Copia del expediente laboral de la demandante. (f.42-59 del archivo 022 del expediente digital).

Por parte de las entidades demandadas: En cuanto a la prueba documental solicitada (f.12 de la carpeta 18Contestación) y la prueba del interrogatorio de parte solicitado (f.14 de la carpeta 19Contestación), este Despacho debe verificar si las mismas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, a fin de que puedan ser decretadas y tenidas en cuenta para efectos de demostrar los hechos que en la demanda se mencionan y que sirven de fundamento a las pretensiones, y así lograr emitir concepto del fondo del asunto.

Sobre el particular debe tenerse en cuenta que el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en el sentido de indicar que:

«...la doctrina ha clasificado los requisitos para la admisión de las pruebas en extrínsecos (generales para cualquier medio de prueba) e intrínsecos (según el medio de prueba de que se trate). Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 168 del Código General del Proceso y se refieren a: 1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso. 2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho. 3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales. 4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.»²

Es decir, que el juez debe clasificar las pruebas solicitadas de acuerdo a su conducencia, pertinencia y utilidad para establecer si las decreta o no, teniendo en cuenta que ellas sirvan para esclarecer los hechos de la demanda.

Por otra parte, debe anotarse que la necesidad de una prueba radica en que ésta sea relevante para llevar al juez al grado de convencimiento suficiente para que pueda solucionar el problema objeto de litigio y demostrar los hechos que son tema de prueba en el proceso.

Del análisis del proceso se advierte que la parte demanda solicitó el decreto de una prueba documental referente al expediente administrativo de la parte demandante e interrogatorio de parte de la misma, pruebas que para este Estrado Judicial no son pertinentes, ni conducentes comoquiera que ya se allegaron los documentos suficientes para proferir una decisión de fondo y no se hace necesaria la práctica de otros medios de prueba.

Razón por la cual se **NIEGAN** el decreto de la prueba documental al expediente administrativo de la demandante y la práctica del interrogatorio de parte, solicitados por las entidades demandadas.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia de 8 de junio de 2016. Radicado N° 110010328000201600001-00

CUARTO. Consulta del Expediente: PONER a disposición de las partes y del Ministerio Público el expediente completo de la presente controversia en medio digital, que podrá ser consultado <u>aquí</u>³.

QUINTO. Alegatos de Conclusión: una vez ejecutoriado este auto, CORRER traslado a las partes por el término de diez (10) días, a fin de que se sirvan rendir sus alegatos de conclusión por escrito.

El señor Agente del Ministerio Público, si a bien lo tiene, podrá presentar concepto dentro del término dispuesto en el párrafo anterior.

SEXTO. Término de Decisión: ADVERTIR que la sentencia anticipada será proferida por escrito, dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento de la oportunidad para alegar de conclusión.

SÉPTIMO. Control de Legalidad: según lo prevé el artículo 207 del CPACA, una vez revisada la actuación, no se encuentra causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, están dados los presupuestos procesales para continuar con el trámite procesal, y tampoco se avizora que deba proferirse sentencia inhibitoria.

OCTAVO: Notificar la presente providencia mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 2080 de 2021 que modificó el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA JUEZ

MAM



³ Si el hipervínculo no funciona, copie la siguiente dirección electrónica en su navegador web: <u>110013335025-2021-00335-00</u>

N.R.D. 2021-00335-00 Demandante: OMAIRA CARDONA DUQUE Demandada: NACIÓN – MIN EDUCACIÓN - FOMPREMAG

Página **5** de **5**

Firmado Por:
Antonio Jose Reyes Medina
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Sala 025 Contencioso Admsección 2
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 7ab88e770a424310402ae6136af355c486d09077312803eb57b2c0346a97a533